

El secuestro de las urnas

LOS ASESINATOS de dos jefes militares y un soldado, ayer en Madrid, son un intento desesperado por parte de ETA de llevar a cabo el secuestro de las urnas. El debate democrático de las distintas opciones electorales se intenta desvirtuar por la extorsión del terror. Paralizar los avances democráticos de la sociedad española constituye la finalidad última de quienes perpetraron el atentado de la avenida del Manzanares. Sus autores merecen el desprecio y la condena de la sociedad. Al constituirse en enemigos del sistema de libertades, no desempeñan papeles de adversarios en el debate democrático: persiguen la destrucción de éste.

Los temores de que ETAm se hiciera presente en la campaña electoral a través del único lenguaje que es capaz de articular, el de la metralleta, se han confirmado con el asesinato del comandante Ricardo Sáenz de Inestrillas, el teniente coronel Carlos Vesteiro y el soldado Francisco Casillas. Con el de ayer son tres los atentados criminales de ETAm en Madrid en el último mes y medio. A fines de abril fueron asesinados cinco guardias civiles, y 15 días después, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil, salvaba milagrosamente la vida al no llegar a estallar las tres granadas lanzadas contra el vehículo en el que viajaba. Por otro lado, los restos de ETApm anunciaron ayer su retorno a la *lucha armada*, añadiendo un nuevo dato a la tensión y a la criminalidad política del momento.

El pasado sábado, ETAm hacía público un comunicado en el que consideraba que la actitud de las autoridades de Vizcaya con motivo del intento de homenaje al miembro de ETA Joseba Asensio marcaba un "punto sin retorno" en la degeneración del Gobierno socialista, cuya actuación calificaba de "brutal", "irresponsable" y "cruel". ETA aprovechaba la ocasión para asumir la responsabilidad del atentado que costó la vida a un guardia civil, Antonio Ramos, de 33 años, asesinado en Mondragón el mismo día en que Joseba Asensio era hallado muerto en su celda, así como del intento de voladura, un día después, en Hernani, de un vehículo en el que viajaban varios guardias civiles. Acostumbrados a escuchar, en el curso del mismo acto y como partes de un sonsone-

te común, consignas que reclaman simultáneamente "ETA, mátalos" y "amnistía" para los que matan, los ciudadanos vascos están curados de espanto respecto a la peculiar lógica de los terroristas y quienes aplauden sus crímenes o se apoyan en ellos para solicitar un voto en las urnas. Pero es imposible no sentir repugnancia ante el vacío moral de quienes no ven contradicción entre reclamar el respeto a los derechos humanos *propios* y su negación a todos los que los mismos terroristas sitúan al otro lado de la raya. Sean oficiales del Ejército, paseantes casuales, guardias civiles o jóvenes que cumplen el servicio militar.

Es seguro que ETA tratará de ampararse en la ideología *ultra* de Sáenz de Inestrillas para justificar su triple y deleznable crimen de ayer. El comandante asesinado fue procesado y condenado hace años por su participación en una conspiración militar, conocida como *operación Galaxia*, y dirigida contra el régimen parlamentario. Pero ETA no distingue entre sus víctimas ni es menos execrable un asesinato que otro en virtud de la ideología de las mismas. Cualquier justificación política cae por su base cuando fue la propia ETA quien disparó a muerte y por la espalda al general Quintana Lacaci, uno de los valerosos militares defensores del orden constitucional, cuya actitud, entre otras, hizo imposible el golpe del 23-F. En realidad, ETA es hoy el único aliado solvente que le queda al golpismo. Esa ETA (y sus vicarios) que exige plenas garantías jurídicas y procesales cada vez que uno de sus pistoleros comparece ante los tribunales, pero se considera legitimada para procesar, juzgar, condenar y ejecutar a las personas por ella elegidas como víctimas.

Las moderadas expectativas de salida a la espiral de la violencia abiertas por las conversaciones entre Herri Batasuna y el PNV han vuelto a ser pisoteadas por el bandidaje político. No hay palabras ya para expresar la repulsa ante el chantaje permanente de la canalla sobre la convivencia española. Pero hay motivos para exigir al Gobierno más diligencia, por difícil que sea, para descubrir a los asesinos y desarticular el ya célebre *comando España*. A fin de que los culpables sean puestos a disposición de la justicia.